La renta mínima que viene

Expertos y entidades opinan sobre cómo debería ser la reforma de la ayuda

CAMILO S. BAQUERO
Barcelona

La renta mínima de inserción (RMI), la última ayuda para personas sin ingresos y con alto riesgo de exclusión, espera desde 2011 una reforma. El Parlament aprobó el pasado jueves, sin el apoyo de CiU, una moción para forzar a la Generalitat a acometer en tres meses lo que no ha hecho en cuatro años.

Las entidades sociales, sin embargo, miran el calendario electoral. En juego está la subsistencia de los beneficiarios de los más de 27.000 expedientes activos, un 8,3% más que el año pasado. La entrega de los 460 euros mensuales se condiciona a realizar itinerarios de formación. En 2014, se liquidaron 154 millones de euros en esta prestación económica. El presupuesto de este año es de 173 millones.

Pero ¿cómo tendría que ser esta reforma? Expertos y entidades llevan haciendo propuestas desde antes del 2011. El verano de ese año, CiU decidió revisar la prestación y dejó a miles de personas sin la ayuda argumentando una lucha contra el fraude. "El cambio tuvo que ver más con un recorte en el gasto que con adecuarla a las necesidades", cree Ignasi Carreras, profesor de ESADE.

Se excluyó, por ejemplo, a las personas sin empleo que no tenían una dificultad que derivara en peligro de exclusión social. Además, la RMI no se podría complementar más con otras ayudas. "El perfil de la pobreza y el riesgo de exclusión no han hecho más que aumentar y el formato de la prestación ha quedado desfasado. La posibilidad de reinserción para algunos colectivos es complicada", dice Sebastià Sarasa, profesor de la Universidad Pompeu Fabra.

Desde Entidades Catalanas de Acción Social, ECAS, piden que "se clarifiquen los derechos y alternativas que tienen las personas que se cronifican en el programa". El decreto que modificó la ayuda en 2011 establece que la prestación acaba tras 60 meses. Pero como muchos casos las posibilidades de entrar en el sistema laboral son muy limitadas, esa norma no se ha cumplido. De ahí que los trabajadores sociales aseguran que "es urgente derogar las medidas que se consideran inviables y definir las que restan vigentes".



Ciudadanos a las puertas de Bienestar Social. / CARLES RIBAS

Otro aspecto es hacer complementaria la renta mínima. "La recepción de una ayuda para un alquiler social representa la pérdida de la RMI si se supera la cantidad límite de ingresos", denuncian desde ECAS. David Casado, autor del estudio sobre RMI encargado en 2009 por IVALUA, coincide con Carreras en que es necesario desdoblar la prestación, una parte dedicada a la inserción de hogares altamente ocupables y otra más paliativa para la población en la cola de la exclusión. Una recomendación publicada en 2010.

El gran número de trabajadores "pobres", también hace poner sobre la mesa el tema de que la ayuda sea compatible con los salarios precarios. Si bien la Generalitat ha agilizado el proceso para que un beneficiario con un trabajo temporal pueda regresar a la RMI una vez se acaba su contrato, las entidades aún ven trabas. Según una respuesta parlamentaria al grupo socialista, el 22% de los 553 receptores de la RMI que participaron en el plan de ocupación Formación y Trabajo volvieron a la prestación tras finalizar su itinerario. Otros 496 recibieron ayudas por desempleo.

La reforma también podría servir para diseñar un instrumento para combatir la pobreza infantil, propone Sarasa. La Mesa del Tercer Sector pidió en su último encuentro con el presidente, Artur Mas, una mensualidad de 465 euros para las 34.000 familias catalanas que no tienen ingresos. "Existen muchas dudas sobre si la RMI es solo para los perfiles laborales o también para los sociales, pues no existe otra alternativa en el sistema para personas con graves problemáticas sociales", explican desde ECAS.

> El calendario electoral condiciona el futuro de los 27.000 expedientes

> "El cambio que hizo la Generalitat en 2011 fue para recortar el gasto"

"No es que estemos pagando por hacer nada, estamos compensando desigualdades", defiende Carreras Sarasa, quien cree que para realizar este cambio hace falta voluntad política. "No hay ningún argumento técnico para no incluir estas mejoras. Aquí hubo un consejero (Francesc Xavier Mena) que salió a culpar a los inmigrantes por el desbordamiento del programa", agrega Sarassa. "La RMI no es una herramienta por si sola. Falta una política clara para la ocupabilidad de muchos perfiles", agrega.

La anorexia causa la muerte del 4% de los menores que la sufren

VIENE DE LA **PÁGINA 1**

Pese al avance de la detección precoz en las consultas, que permite diagnosticar y tratar el trastorno alimentario en fases más tempranas, todavía muchos casos acaban en ingreso. En 2013, 451 jóvenes fueron hospitalizados por transtorno de conducta alimentaria (TCA), un 22% más que los registrados en 2007.

"Si se cogen a tiempo, se pueden tratar en el ambulatorio y en las consultas. En anorexia, alrededor del 30% se recupera absolutamente, el otro 30% llega a tener una vida normal aunque siempre pendiente de comer sano y controlando su peso, y otro 30% se cronifica", explica Pàmias. Estas dolencias tienen además, según Faus Boronat, un riesgo añadido: "El índice de recaídas es elevado", advierte.

Con todo, apunta Pàmias, las TCA tienen unos índices de mortalidad "todavía demasiado altos". El 4% de los jóvenes que padecen anorexia acaban falleciendo, "o por desnutrición o por suicidio", añade la médica. "Los TCA suelen acompañarse de otros trastornos, de personalidad, depresión o incapacidad para controlar los impulsos", concluye Faus Boronat.

Los expertos advierten de que sigue habiendo muchos casos ocultos, que entran por la red sanitaria privada y no llegan a ser incluidos en los registros públicos. Las estimaciones indican que la prevalencia de los TCA en la población joven es del 6%. El perfil de los chavales apenas ha mutado en los últimos años. "Aunque el 90% de las personas con TCA son chicas, en los últimos años hemos visto cómo se ha incrementado también el número de chicos. La edad de riesgo sigue estando entre los 15 y los 18 años", señala Pàmias.

Podem acusa a Convergència de "esconder su corrupción" con los ataques a Ubasart

El partido admite que fue un error llamar "odio" al malestar social por los recortes

EL PAÍS, **Barcelona**

Podem admitió ayer que fue "desafortunado" el uso de la palabra "odio" por su secretaria general, Gemma Ubasart, para referirse al rechazo y malestar social que generan los recortes y las "recetas neoliberales" del Gobierno de Artur Mas. "Otras palabras, como malestar, irritación o desencanto, habrían expresado mejor lo que quería trasmitir", suscribió el partido en un comunicado.

Podem, sin embargo, calificó de desproporcionada la reacción de Convergència Democràtica (CDC) ante una expresión hecha en "una conversación informal". "Los calificativos incluidos en los ataques están muy lejos de lo que Podem y Ubasart siempre han defendido y representan", sigue el comunicado.

Podem relaciona la reacción de "dirigentes y algunos militantes, seguidores e intelectuales de CDC" a la "delicada situación que vive el partido", abocado a un proceso de "refundación" por el cúmulo de casos de corrupción que le acechan. Podem pone como ejemplo "la fortuna oculta al fisco y los negocios" que han llevado a la familia del expresidente catalán Jordi Pujol a comparecer ante el Parlament, el *caso Palau* o la imputación del diputado en el Parlament Xavier Crespo y del presidente de la diputación de Tarragona, Josep Poblet. "La corrupción envuelve la acción de Gobierno de CDC", sostiene el escrito. "Es en este contexto", continúa el comunicado, "que debe entenderse que CDC dedique una jornada tan especial como es un Consejo Nacional, celebrado cuatro días después de la publicación de las declaraciones, para recurrir a ellas y lanzar una cortina de humo que esconda sus casos de corrupción". Esto muestra, según el partido, "el nerviosismo y desconcierto" que cunde en CDC ante "su incierto futuro".

